

NUE 47-ADP-2018 (DH)

[REDACTED] contra la Policía Nacional Civil

Resolución Definitiva

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las trece horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve.

#### A. Descripción del Caso

I. El apelante [REDACTED], en adelante el apelante, presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Policía Nacional Civil (PNC), solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: "suprimir definitivamente su antecedente delincencial en su solvencia de antecedentes policiales", fue condenado por el delito de: "robo", del cual se le extinguió la responsabilidad penal y fue rehabilitado de sus derechos de ciudadano; solicitó solvencia de antecedentes policiales para trámites en Centros Penales.

En relación con ello, el oficial de información de la PNC resolvió: "(...) en atención a todo lo antes expuesto, se considera que no es procedente acceder a lo solicitado (...), esto en razón, que a partir de dichos antecedentes y del contexto de los mismos, se infiere en la existencia de un peligro real e inminente en cuanto a que el solicitante podría utilizar dichos documentos para sorprender a las instituciones Públicas encargadas de la autorización de permisos, licencias, prerrogativas o ingresos a entidades Estatales (...) lo cual iría en detrimento de la seguridad pública, el mantenimiento del orden y la paz pública y consecuentemente, en perjuicio de derechos de terceras personas".

II. El apelante interpuso recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose a la Comisionada María Herminia Funes de Segovia, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución; sin embargo, el



11 de marzo renunció al cargo y fue reasignado a la Comisionada Daniella Huevo Santos, por encontrarse en funciones en el cargo.

El 3 de junio del presente año, el oficial de información de la PNC, remitió vía electrónica, el expediente administrativo, relacionado con el presente caso; en atención al requerimiento realizado por este Instituto, mediante auto de las trece horas con treinta y cuatro minutos del 23 de mayo de 2019.

El 11 de junio de este año, [REDACTED], presentó escrito por medio del cual manifestó actuar en su calidad de apoderado general judicial de la PNC, sin acreditar dicha calidad debido a que, no se le había entregado el testimonio conferido por el nuevo Director de la PNC.

El 14 de junio de este año, [REDACTED], presentó escrito por medio del cual solicitó intervención como apoderado general judicial y administrativo con cláusulas especiales de Mauricio Antonio Arriaza Chicas, Director General de la PNC y consecuentemente representante legal de dicha institución, calidad acreditada mediante copia certificada de testimonio de poder general judicial y administrativo, agregada al expediente.

En esa misma fecha, presentó informe justificativo y solicitó se tenga por evacuado dicho requerimiento.

Respecto a lo anterior, es importante mencionar que conforme al principio de preclusión dispuesto en el Art. 143 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), los plazos procesales son perentorios e improrrogables, en atención a otros principios como el de contradicción y lealtad procesal (art. 4 CPCM); por lo que, el informe justificativo se tendrá por no rendido.

III. Por otro lado, mediante auto de las ocho horas con cuarenta minutos del 5 de junio de este año, se citó a las partes para la celebración de la audiencia oral relacionada con este caso. Sin embargo, dicho acto no se realizó debido a la incomparecencia de ambas partes, pese a haber sido notificadas en legal forma, y sin justificar motivo alguno.

## B. Análisis del Caso.

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Una breve referencia al derecho a la protección de datos personales, y en específico al derecho de cancelación y el principio de confidencialidad; (II) Consideraciones sobre los antecedentes policiales que registran las personas condenadas y rehabilitadas; (III) Se analizará la procedencia de la cancelación del dato personal negativo del apelante, conforme a las normas legales pertinentes.

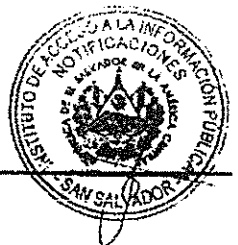
I. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros<sup>1</sup>.

A. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *"Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante"* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la sentencia definitiva de amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales, es el medio por el cual se salvaguardan los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos,

---

<sup>1</sup> Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—, lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende de si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona; hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen; solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de cancelación o supresión (Art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional es la facultad que se otorga a un individuo para que solicite la eliminación de sus datos de carácter personal de las bases que tenga un ente determinado, *“por la falta de relevancia y actualidad de la información para los fines que fueron recabados o, simplemente, por el propósito de permitir al titular que recupere la disponibilidad sobre cualquier faceta de su personalidad y de su datos íntimos o estrictamente privados”*<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.

En ese contexto, como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo, y ya no sirve a los fines para los que fue recabada (principio de finalidad).

C. Ahora bien, en la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional del 8 marzo de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 58-2007, se reconoció que el derecho a la autodeterminación informativa (o protección de datos personales), -que comporta diferentes facultades de controlar sobre el uso de la información personal que le atañe, tanto en su recolección como en su tratamiento, conservación y transmisión-, no es ilimitado. Las personas individuales o colectivas carecen de derechos fundamentales absolutos sobre sus datos. Esta es la razón por la que el individuo debe tolerar límites a ese derecho, en razón de un interés general.

Del mismo modo, se acotó que las restricciones o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, la cual debe ser legítima (constitucional o legal), explícita y determinada. Para ello el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringido por el poder público cuando sea indispensable para la protección del interés general. Y es que la fuerza obligatoria del derecho constitucional se manifiesta, en primer lugar, en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución.

Por lo que, en cada caso en concreto, se debe dejar claro el alcance del límite a derechos, y no quedando sujetos a fórmulas interpretativas que restrinjan un derecho más allá del alcance planteado por el legislador.



D. Es importante señalar que el derecho a la protección de los datos personales se encuentra informado por una serie de principios, en el que resalta para el caso en concreto: el principio de confidencialidad (Art. 36 letra “d” de la LAIP).

Este se define como la obligación del responsable del registro de las bases de datos, de establecer controles o mecanismos para quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales mantengan y respeten el secreto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular de los datos personales<sup>3</sup>.

En adición a este principio, se encuentran algunos métodos preventivos para salvaguardar la identidad, circunstancias o situaciones en las que una persona individual o jurídica se encuentra inmersa, por ejemplo, las reglas de anonimización, las cuales funcionan para facilitar el procesamiento de datos personales, pero a la vez para proteger al individuo de un seguimiento de sus datos mediante la asignación automática de características que lo permitan individualizar.

También, se encuentra el bloqueo de los datos personales, que es el método que tiene como fin impedir su ulterior tratamiento o disposición, produciendo efectos similares al borrado físico de los mismos; esto procede cuando existe una imposibilidad técnica como por causa del procedimiento o soporte utilizado, también cuando una norma legal ordena la conservación de los datos personales y otorga únicamente su disposición a las autoridades públicas conforme a sus atribuciones y competencias, impidiendo que terceros tengan acceso a esos datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, salvo que sean necesarios para garantizar razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

**II. Establecido lo anterior, es pertinente mencionar que los antecedentes policiales son datos personales que derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal u otras normas que establecen delitos o faltas, o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de la autoridad policial a la instrucción de diligencias y su**

---

<sup>3</sup> Disposición 23, de los “Estándares de Protección de Datos Personales” emitidos por la Red Iberoamérica de Protección de Datos, en Santiago de Chile, Junio 2017.

posterior remisión a las autoridades judiciales o administrativas. Esos datos personales son registrados en soporte físico y electrónico sin el consentimiento de la persona afectada y susceptible de tratamiento.

Sin embargo, dichos datos son almacenados por la PNC, a raíz de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Orgánica de la referida Institución, el cual en su artículo 23 establece: “La PNC, para efecto de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica, podrá llevar un registro de antecedentes de las personas que hayan sido detenidas por atribuírseles la comisión de delitos o faltas. Asimismo, extender constancias o certificaciones de antecedentes policiales a las personas que lo soliciten”.

Es decir, de dicha disposición podemos inferir que el registro de antecedentes policiales, tiene dos finalidades específicas: 1) la de servir para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la PNC; y, 2) la de servir de soporte para la emisión de certificaciones o constancias de antecedentes a las personas que lo soliciten.

En el primero de los casos, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la PNC, establece una serie de funciones que debe cumplir la PNC, las cuales en su mayoría están relacionadas con proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, mantener la paz, el orden, seguridad pública, prevenir la comisión de delitos, garantizar el cumplimiento de las leyes, acopiar y ordenar datos para la elaboración de una estadística nacional, entre otras.

En el segundo de los casos, para la emisión de certificaciones de antecedentes policiales de las personas que lo soliciten. En este supuesto, es pertinente mencionar que en nuestro país las personas solicitan este documento, como requisito para adquirir alguna prerrogativa u obtener alguna concesión de cualquier tipo y además, cuando es requerido por otra Institución pública o de índole privada.

No obstante, la persona que posee antecedentes policiales por la comisión de cualquier tipo de delito, que ha cumplido la pena impuesta, y que fue rehabilitada en sus derechos de ciudadano por la autoridad competente —Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena—, tiene restablecidos sus derechos enunciados en la Constitución (Art. 75 inciso final de la Constitución).



Y es que, dada la anterior afirmación es menester traer a colación lo dispuesto en el artículo 27 inciso tercero de la Constitución de la Republica, en donde se regula la obligación del Estado, de organizar los centros penitenciarios con el objeto de corregir a las personas que han cometido un delito, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y prevención de delitos; para el cumplimiento de tal obligación se decretó la Ley Penitenciaria, la cual en su artículo 6 regula el “Principio de Judicialización”, en virtud del cual toda pena se ejecutará bajo el estricto control del Juez de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, y la Cámara respectiva, en su caso, quienes harán efectivas las decisiones de la sentencia condenatoria. El juez también controlará el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario.

Asimismo, es atribución del citado Juez, declarar la extinción de la pena en los casos que proceda conforme al Código Penal y su norma procesal, tramitar y resolver el incidente de rehabilitación de los condenados por delito, entre otras; de tal manera, que determinado el cumplimiento de ciertos parámetros establecidos en la leyes penitenciarias, rehabilita al ciudadano en sus derechos; es decir, que dicha decisión no es automática, sino que el Juez debe comprobar ciertos requisitos para decretarlo. De esa forma, el ciudadano goza nuevamente de todos sus derechos.

Por otro lado, el Art. 36 letra “d” de la LAIP, los titulares de los datos podrán solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial.

En ese sentido, este Instituto tiene la competencia legal para conocer y determinar conforme al Art. 29, 83 letra “a” y 96 letra “d” de la LAIP, sobre lo peticionado por el apelante. Asimismo, posee la competencia de velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP conforme a su Art. 58 letra “a”; además, interpretar las normas a la luz de la Constitución, actitud que se exige no sólo para entes jurisdiccionales, sino de manera general para todo funcionario de acuerdo a la jurisprudencia contenciosa administrativa<sup>4</sup> y en aplicación al Art. 235 de la Cn.

---

<sup>4</sup> Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 27 de junio de 2000, en el proceso de legalidad de referencia 157-M-99.



III. Una vez aclarado lo anterior, es preciso analizar los elementos vertidos en el presente procedimiento, para determinar la procedencia de la cancelación del dato personal negativo del apelante en el registro de antecedentes policiales.

A. La LAIP en su Art. 32, establece deberes y reglas a los entes obligados, sobre el tratamiento de los datos personales en su poder, enmarcados en los principios que orientan el derecho a la protección de datos personales.

En ese sentido, establece como obligación en la letra b, el *“usar los datos exclusivamente en el cumplimiento de los fines institucionales para los que fueron solicitados u obtenidos”*, esta regla en consonancia con el principio de finalidad, que según jurisprudencia constitucional, *“los datos de carácter personal deben ser recogidos para alcanzar un objetivo lícito, es decir, deben ser utilizados para un fin específico y legítimo; por lo que una vez que este ha sido alcanzado la información debe cancelarse para impedir que sea utilizada en una finalidad distinta para la que se ha obtenido”*<sup>5</sup>.

B. Por otra parte, la Directiva para normar la emisión de la solvencia de antecedentes policiales y la constancia de antecedentes policiales, emitida por la Dirección General de la PNC en julio de 2017, en su romano VI reconoce: “Normas: (1). Para la emisión de los documentos denominados solvencia de antecedentes policiales y la constancia de antecedentes policiales, la unidad de registro y antecedentes policiales (URAP) deberá consultar las bases de datos siguientes: a) personas detenidas del sistema imperium, b) detenidos PNC CIACDETENIDOS, c) disposiciones judiciales, y d) interpol.

En la misma normativa, se establece la emisión de los documentos en referencia, en virtud que son exigidos por distintas leyes, como requisito para trámites en instituciones públicas, para el otorgamiento de permisos o prerrogativas —Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, Ley de la Carrera Policial, entre otras-.

<sup>5</sup> Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 20 de octubre de 2014, en el proceso de amparo de referencia 142-2012.



Aunado a ello, dispone que la Instituciones del Estado se encuentran supeditadas a potenciar el ejercicio del derecho de protección de datos personales de los ciudadanos; es decir, la facultad de acceso, rectificación cancelación y oposición, de sus datos personales, lo cual incide directamente en el resguardo de los mismos, por parte de las Instituciones Públicas; sin embargo, no es un derecho absoluto ya que se ve limitado en ciertas circunstancias una de ellas, es la relacionada con mejorar el control de los servicios que brinda el Estado, por medio de Instituciones establecidas para tal efecto y conforme a requisitos que las leyes de la materia regulan para armas de fuego, productos pirotécnicos, servicios privados de seguridad y el ingreso a las Instituciones de Seguridad Pública.

Por lo que, previo a decidir sobre la supresión o cancelación de los antecedentes policiales que registra una persona este Instituto, considera pertinente tomar en cuenta parámetros como: el tiempo que lleva rehabilitado y la finalidad con la cual fue requerido el documento.

En ese sentido, en el presente caso ha quedado probado mediante expediente administrativo remitido por parte del ente obligado lo siguiente: (i) Que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, condenó a [REDACTED], a dieciséis años de prisión por la comisión del delito de robo; (ii) Que el 10 de marzo de 2011, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, le extinguió la responsabilidad penal por el delito de robo y le rehabilitó en sus derechos de ciudadano; (iii) Que el 8 de enero de 2018, la PNC, a través de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales, emitió solvencia de antecedentes policiales a nombre del apelante, en la cual consta que el documento requerido fue solicitado para ser presentado en Centros Penales.

Ahora bien, de lo anterior se puede resaltar que el señor [REDACTED], fue condenado por el delito de robo a la pena de dieciséis años de prisión; sin embargo, habiendo cumplido dicha pena se le extinguió la responsabilidad penal y se le rehabilitó en sus derechos de ciudadano en año 2011; es decir, hace más de 8 años.

Respecto a la finalidad con la cual ha sido requerido el documento es un parámetro que debe analizarse aunado a la existencia de una ley en sentido formal, que exija la carencia de antecedentes policiales o penales.

Ello en atención que tal y como se dispone en Directiva para Normar la Emisión de la Solvencia de Antecedentes Policiales y la Constancia de Antecedentes Policiales los derechos relacionados con la protección de datos personales, al igual que otros derechos no son absolutos sino que como establecen los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos, aprobados en junio de 2017, por los miembros Red Iberoamericana de Protección de Datos, los cuales sirven de referencia para países que aún no cuentan con legislación propia o bien para reforzar el marco normativo los países, los pueden limitar a través de su legislación para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público. Dichas limitaciones deberán ser reconocidas de manera expresa en la ley, con el propósito de brindar certeza suficiente a los titulares acerca de la naturaleza y alcance de la medida.

En ese orden de ideas, debido a que consta en el expediente administrativo remitido por parte del ente obligado que el apelante solicitó su solvencia de antecedentes policiales para ser presentada en “Centros Penales”. Es oportuno remitirse a lo dispuesto en la Ley Penitenciaria la cual en su Art. 14-C bajo el epígrafe “*requisitos para el ingreso*”, regula: letra b) “haberse registrado en el registro de visitas y anexado la copia de DUI; así como la respectiva solvencia de antecedentes penales y policiales”.

Asimismo, el Art. 14-E, letra h) de la misma norma dispone: “no podrán ingresar como visita de los internos a los centros penitenciarios, los que posean antecedentes penales”.

De tales disposiciones, se infiere que uno de los requisitos para poder ingresar a un Centro Penitenciario es la presentación de la solvencia de antecedentes policiales; asimismo, se requiere que la persona que pretenda ingresar carezca de antecedentes penales.

De tal manera, que la persona que posea antecedentes penales por la comisión de cualquier tipo de delito, no podrá ingresar a un Centro Penitenciario de por vida; debido a que, la norma en referencia no establece un parámetro de tiempo para restablecer su ingreso al establecimiento; limitante con la cual, podrían estarse vulnerando otro tipo de derechos fundamentales a las personas que deseen ingresar al Centro Penitenciario con el objeto de realizar visitas a sus familiares, como el derecho a la libertad que posee cada ser humano.



Y es que, la libertad es una proyección inmediata e inseparable de la dignidad humana por lo que los poderes públicos tienen el deber de respetar y garantizar a la persona que en su condición de ser racional, igual, libre y capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y con su entorno, pueda, sin interferencias justificadas, optar por aquellos aspectos de la vida que más se ajusten a su personalidad, ideas e interés y que coadyuven al desarrollo de su personalidad en los ámbitos individual, familiar y social.<sup>6</sup>

Es decir, se estaría limitando de esta manera la libertad que cada posee cada individuo de cultivar sus relaciones familiares; cuando un familiar - esposo, hijo, padre, madre etcétera-, se encuentre interno en un Centro Penitenciario y la persona que desee visitarlo posea antecedentes policiales o penales por la comisión de cualquier tipo de delito; ya que, como se mencionó la Ley Penitenciaria no establece un parámetro de tiempo.

Sin embargo, para el presente caso el apelante, no aportó mayores elementos, que permitieran evidenciar que el no ingreso a un Centro Penitenciario o la realización de cualquier tipo de trámite dentro del mismo, pudiese estar vulnerando alguno de sus derechos fundamentales; es decir, no anexó documento durante la tramitación de este procedimiento por medio del cual se comprobara que requirió solvencia de antecedentes policiales para visitar a un familiar interno en un centro penitenciario, situación con la cual pudiese verse afectado su derecho fundamental de libertad el cual incluye el derecho a cultivar relaciones familiares; o bien otro documento por medio en el cual se constatará que realizaría otro trámite que limite alguno de sus derechos fundamentales.

Asimismo, tampoco fue posible conocer la situación relacionada en el párrafo anterior en la audiencia oral, de este caso, debido a la incomparecencia del apelante a dicho acto, pese a haber sido notificado en debida forma y sin manifestar motivo alguno. Razón por la cual, en apego a las disposiciones antes citadas de la Ley Penitenciaria, no es procedente ordenar la supresión de su antecedente policial para trámites en Centros Penales, pues no existen elementos suficientes que permitan constatar que la limitación establecida por el legislador

---

<sup>6</sup> Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 15 de febrero de 2017, en el proceso de inconstitucionalidad de referencia 22-2011.

—previa a la entrada en vigencia de la LAIP—, en dicha norma vulnera otro tipo de derechos fundamentales del apelante.

Finalmente, es pertinente modificar la resolución del oficial de información de la PNC, en el sentido que no procede la supresión, tampoco su bloqueo o confidencialidad, debido a que la petición del apelante sobre su solvencia de antecedentes policiales, se encontraba encaminada a ser presentada en Centros Penales y a la existencia una ley en sentido formal —Ley Penitenciaria—, que establece que no podrán ingresar a Centros Penitenciarios las personas que posean antecedentes penales. Asimismo, porque no se probó dentro del procedimiento que dicha restricción pudiera interferir en el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

### **C. Decisión del Caso.**

a) Tener por recibido el expediente administrativo relacionado con el presente procedimiento.

b) Tener por parte a José Roberto Escobar González, en su calidad de apoderado de la Policía Nacional Civil (PNC), para el presente caso.

c) **Modificar** la resolución emitida por el oficial de información de la PNC a las ocho horas del 13 de marzo de 2018; en el sentido, que no procede la supresión, tampoco el bloqueo o confidencialidad del antecedente delincuencia del apelante, debido a que la petición del apelante sobre su solvencia de antecedentes policiales, se encontraba encaminada a ser presentada en Centros Penales y a la existencia una ley en sentido formal —Ley Penitenciaria—, que establece que no podrán ingresar a Centros Penitenciarios las personas que posean antecedentes penales.

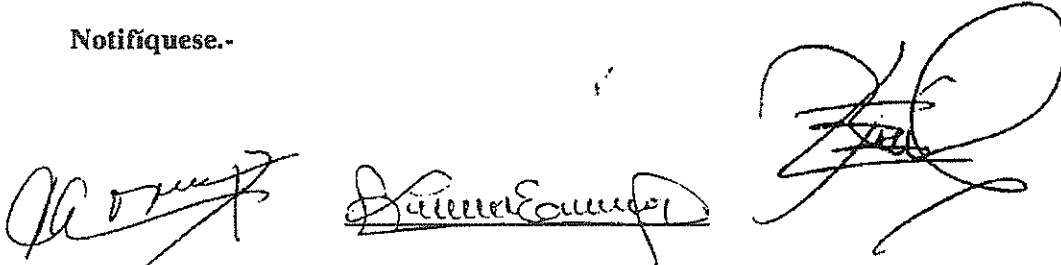
d) **Ordenar** a la PNC a través de su oficial de información, que dentro del plazo de **5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución modifique la resolución objeto de la controversia en los términos señalados en el literal c), de la parte decisión del caso de esta resolución.

e) Requerir a la PNC, que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo señalado en el literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido por vía electrónica a la dirección: [oficialreceptor@iaip.gob.sv](mailto:oficialreceptor@iaip.gob.sv).

f) Remitir el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique la ejecución de esta resolución.

g) Publíquese esta resolución, oportunamente.

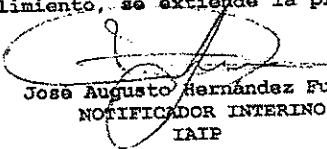
Notifíquese.-



**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.**

DR/CT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveyo por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los doce días del mes de agosto de dos mil diecinueve.

  
José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR INTERINO  
IAIP

